



HUMAN
RIGHTS
WATCH

CONVIRTIENDO A MIGRANTES EN DELINCUENTES

El impacto adverso de procesos penales en la frontera estadounidense



Convirtiendo a migrantes en delincuentes

El impacto adverso de procesos penales en la frontera
estadounidense

Copyright © 2013 Human Rights Watch

Todos los derechos reservados.

Impreso en Estados Unidos de América

Diseño de portada por Rafael Jiménez

Human Rights Watch se dedica a proteger los derechos humanos de personas en todo el mundo. Trabajamos con víctimas y activistas para prevenir la discriminación, defender la libertad política, proteger a personas frente a actos inhumanos en tiempos de guerra y llevar ante la justicia a quienes cometen abusos. Investigamos y denunciemos violaciones de derechos humanos para que se juzgue a los responsables. Cuestionamos a gobiernos y a quienes detentan el poder para que pongan fin a prácticas abusivas y respeten el derecho internacional de los derechos humanos. Procuramos además obtener el apoyo del público y la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos para todos.

Human Rights Watch es una organización internacional con personal en más de 40 países, y oficinas en Ámsterdam, Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Goma, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Moscú, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco, Tokio, Toronto, Túnez, Washington DC y Zúrich.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: <http://www.hrw.org/es>



Convirtiendo a migrantes en delincuentes

El impacto adverso de procesos penales en la frontera estadounidense

Resumen.....	1
---------------------	----------

Recomendaciones.....	8
-----------------------------	----------

Al Congreso de Estados Unidos	8
-------------------------------------	---

Al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a los Fiscales Federales	8
--	---

Al Servicio de Control de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP).....	9
---	---

Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos.....	9
--	---

A la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos	9
--	---

Resumen

“Aún no he perdido mis deseos de intentarlo nuevamente”

Cuando Human Rights Watch conoció a Alicia S. (seudónimo) en un albergue para mujeres en Tijuana, México, hacía dos años y medio que no veía a sus hijas.

Alicia llegó a Estados Unidos sin autorización en el 2000. Conoció a un inmigrante no autorizado con quien contrajo matrimonio, y juntos tuvieron dos hijas en Estados Unidos, que ahora tienen 11 y 9 años. A los 5 años, su hija más pequeña comenzó a sufrir insuficiencia renal. En 2009, el esposo de Alicia fue deportado (y desde entonces no tuvo noticias de él). Un año después, la policía interceptó a Alicia cuando salía de un estacionamiento sin encender las luces del auto. Luego de ser rodeada por varios vehículos policiales, los oficiales la arrestaron por no haber pagado una multa que le habían impuesto anteriormente por conducir sin seguro. Los policías se llevaron a Alicia mientras sus hijas lloraban en el asiento trasero del auto.

Esa fue la última vez que Alicia vio a sus hijas. Poco después, fue deportada a México.

Sus hijas viven ahora con una familia de acogida. Al poco tiempo de ser deportada, Alicia se enteró de que su hija había recibido un trasplante de riñón y que la intervención fue exitosa. “Sentí tanta alegría, tanta felicidad”, expresó Alicia mientras esbozaba una sonrisa, con lágrimas en los ojos. “Pero me entristeció no haber podido cuidarla en el hospital”.

Alicia ha intentado regresar a Estados Unidos en varias ocasiones. La primera vez, fue interceptada cerca de la frontera y permaneció en un centro de detención para inmigrantes durante tres meses. La segunda vez, los contrabandistas la abandonaron sin agua ni alimentos en Texas, y fue detenida y acusada penalmente por ingreso ilegal al país, considerado un delito federal de gravedad menor. Nos contó que en la audiencia ante la justicia federal, delante de otros veinte acusados, “rogué al juez que me perdonara y le dije que estaba desesperada por la situación de mis hijas”. El juez la condenó a 13 días de cárcel. Un abogado le indicó que, debido a esta condena, sería prácticamente imposible obtener una visa estadounidense, y que en caso de regresar, podría enfrentarse a un proceso penal por el delito federal grave de reingreso ilegal. Sin embargo, Alicia no quiere pensar en la posibilidad de vivir sin sus hijas. Nos dijo al respecto, “Aún tengo deseos de intentarlo nuevamente”¹.

¹ Entrevista de Human Rights Watch con Alicia S. (seudónimo), Tijuana, México, 17 de octubre de 2012.

Alicia S. es tan sólo una entre las decenas de miles de migrantes que cada año, además de ser deportados y recibir otras sanciones civiles, son procesados penalmente por el ingreso o reingreso ilegal a Estados Unidos. El ingreso ilegal, un delito menor que implica el ingreso al país sin autorización, y el reingreso ilegal, que consiste en volver a ingresar al país luego de haber sido deportado, representan actualmente los delitos federales que más son procesados en Estados Unidos.

La persecución penal de quienes ingresan ilegalmente al país se ha incrementado exponencialmente durante los últimos 10 años. En 2002, se impulsaron 3,000 procesos penales por ingreso ilegal, y 8,000 por ingreso ilegal reincidente; una década después, en 2012, estos procesos habían aumentado a 48,000 y 37,000, respectivamente. En la actualidad, el volumen de casos de esta naturaleza supera a otros delitos federales comunes como los vinculados con drogas, armas de fuego y delitos de guante blanco.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (*US Department of Homeland Security*, DHS), el organismo que se ocupa de implementar las leyes estadounidenses sobre inmigración, remite al Departamento de Justicia una cantidad de casos superior a los enviados colectivamente por la Oficina Federal de Investigaciones (*Federal Bureau of Investigation*, FBI), la Agencia Antinarcóticos (*Drug Enforcement Administration*, DEA), la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (*Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives Agency*, ATF) y el Cuerpo de Alguaciles Federales (*US Marshals Service*)². Casi todas las personas acusadas en relación con estos delitos se declaran culpables, y terminan cumpliendo penas en cárceles federales que van desde unos pocos días hasta 10 o más años de prisión por el delito de reingreso ilegal, antes de ser finalmente deportadas.

El rápido incremento de los procesos penales federales por delitos de inmigración forma parte de una tendencia más generalizada que usa los recursos del sistema penal para asegurar el cumplimiento de normas sobre inmigración, una actividad que tradicionalmente se ha considerado una cuestión de naturaleza civil. El gobierno

² Syracuse University, Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), “Going Deeper” tool, Prosecutions for 2011, <http://tracfed.syr.edu/index/index.php?layer=crl> (consultado el 10 de mayo de 2013). Ver también Migration Policy Institute, “Immigration Enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery”, enero de 2013, <http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars.pdf> (consultado el 7 de abril de 2013), pág. 10.

estadounidense afirma que estos procesos penales tienen dos propósitos: evitar que delincuentes peligrosos ingresen a Estados Unidos y disuadir la inmigración ilegal en general. Sin embargo, como se explica a continuación, un examen más detenido acerca de qué tipo de personas están siendo encarceladas por ingreso y el reingreso ilegal sugiere que muchos de estos procesos no estarían cumpliendo el objetivo deseado.

Muchas de las personas que están siendo procesadas penalmente por ingreso y reingreso ilegal no tienen antecedentes penales o fueron condenadas en el pasado solamente por delitos menores de carácter no violento. Y, como se observa en los comentarios de Alicia expuestos anteriormente, es muy probable que para muchas de estas personas la amenaza de prisión no tenga efectos disuasivos, dado que es poco probable que quienes intentan reunirse con sus hijos u otros seres queridos renuncien fácilmente a esta posibilidad. A su vez, los costos generados por el aumento en la cantidad de procesos penales son significativos y continúan creciendo. Tales costos incluyen cerca de \$1,000 millones anuales tan sólo en gastos de encarcelamiento, además de los perjuicios duraderos que esto supone para la vida de numerosos inmigrantes y sus familiares, entre los cuales hay decenas de miles de personas que son ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes.

El presente informe se elaboró a partir del análisis de datos que pueden ser consultados por el público y se encuentran en poder de la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos (*US Sentencing Commission*) y otros organismos, además de 191 entrevistas mantenidas con personas acusadas por haber ingresado o reingresado ilegalmente al país, sus familiares, otros inmigrantes no autorizados que han ingresado varias veces a Estados Unidos, abogados defensores penalistas, abogados especializados en inmigración, fiscales, jueces y representantes de organizaciones humanitarias y de incidencia. En muchos casos, corroboramos datos de los relatos ofrecidos por estas personas consultando registros judiciales que están a disposición del público. El presente informe también se preparó sobre la base de reuniones con funcionarios del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (*US Customs and Border Protection Agency*, CBP), y de dos dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos (*US Department of Justice*): la División de Derechos Civiles (*Civil Rights Division*) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (*Executive Office of Immigration Review*).

Durante años, los fiscales federales han señalado que los recursos destinados al juzgamiento de casos de reingreso ilegal se concentran en migrantes no autorizados que representan una amenaza para la seguridad pública. Anteriormente, la mayoría de las personas que eran acusadas de delitos graves vinculados con inmigración habían recibido antes una condena por un delito grave. Sin embargo, datos aportados por la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos revelan que los antecedentes penales de quienes son condenados a penas de prisión bajo la categoría de “delitos de ingreso ilegal” han cambiado radicalmente durante la última década. En 2002, el 42 por ciento había recibido condenas penales del tipo que la Comisión considera más graves—como los delitos cometidos con violencia o perpetrados con armas—mientras que solamente el 17 por ciento no contaba con condenas anteriores por delitos graves. En 2011, la proporción de acusados con condenas incluidas entre las más serias se había reducido al 27 por ciento, mientras que la cantidad de acusados sin condenas previas por delitos graves había escalado al 27 por ciento.

Esta falta de criterios de selectividad en los procesos penales se ve agravada por el hecho de que una condena por el delito menor de ingreso ilegal y la posterior deportación podrían convertirse en el fundamento para que luego se acuse a una persona por el delito grave de reingreso ilegal. Los procesos por ingreso y reingreso ilegal se han multiplicado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como parte de una estrategia de la Patrulla Fronteriza estadounidense (*US Border Patrol*) para disuadir la inmigración ilegal. Una vez condenado por ingreso ilegal, incluso a través de programas de juzgamiento masivo como “Operation Streamline”, un migrante que intente volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos tendrá mayores probabilidades de ser juzgado por reingreso ilegal debido a que ahora tiene antecedentes penales. Con cada cruce de la frontera y cada arresto, las sanciones penales aplicadas se tornan más rigurosas. Si bien la pena máxima contemplada para quienes cometen por primera vez el delito menor de ingreso ilegal es de seis meses de prisión, la pena en caso de reingreso ilegal se incrementa en función de cada condena penal anterior, hasta un máximo de 20 años de cárcel cuando existe una condena previa por delito grave calificado. En palabras de un abogado defensor penalista, “Hay una categoría de personas que cumplen una especie de cadena perpetua en cuotas”.

Existen pocas evidencias sobre la capacidad disuasiva de estos procesos frente a la inmigración ilegal. Ante los poderosos “factores de motivación” económicos y políticos que impulsan la inmigración hacia Estados Unidos, y el hecho de que la demanda

estadounidense de mano de obra migrante supera ampliamente la cantidad de visas disponibles, es razonable suponer que el efecto disuasivo de los procesos penales en este ámbito sería menor que en otros ámbitos, al menos para migrantes que están en una situación de desesperación. En particular, estos procesos tienen menores probabilidades de disuadir a los migrantes, incluso a los reincidentes, cuando la razón que los impulsa a ingresar al país está relacionada con necesidades humanas absolutamente básicas, como el deseo de reencontrarse con hijos u otros familiares cercanos, o escapar de situaciones de violencia o persecución en el lugar de origen.

La aplicación cada vez mayor de procesos penales en este contexto también resulta sumamente inquietante en lo que respecta a los derechos humanos. Como ha sido documentado en el pasado por Human Rights Watch, la legislación civil sobre inmigración de Estados Unidos no protege adecuadamente a las familias y, como resultado, es prácticamente imposible que muchas personas que han sido deportadas puedan reunirse legalmente con sus familiares en Estados Unidos. Diversas encuestas recientes, además de informes de organizaciones humanitarias en la frontera, indican que entre quienes intentan ingresar a Estados Unidos hay una proporción cada vez mayor de personas que no se encuadran en la categoría de migrantes tradicionales, sino que serían personas que residieron anteriormente en este país por períodos prolongados y ahora desean volver a estar con sus familias. Cada vez son más los casos en que el sistema inmigratorio de Estados Unidos provoca separaciones familiares mediante la deportación y luego expone a los familiares deportados a la posibilidad de cumplir penas de prisión prolongadas si intentan reunirse con sus seres queridos. El impulso dado a los procesos penales también implica que quienes piden asilo para escapar de contextos de violencia o persecución pueden enfrentar graves obstáculos para obtener la protección garantizada en las normas internacionales sobre refugiados que han sido ratificadas por Estados Unidos.

Si bien el derecho internacional no prohíbe en forma expresa la aplicación de sanciones penales contra inmigrantes no autorizados, numerosos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a aplicar el derecho civil para sancionar a quienes ingresan ilegalmente, y han alertado sobre los riesgos que supone la aplicación del derecho penal en estos casos. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes ha señalado que “el ingreso o la permanencia irregular no deben considerarse en ningún supuesto delitos penales: no constituyen per se delitos contra las personas, el patrimonio o la seguridad nacional”.

A su vez, el volumen y la magnitud de los procesos penales por ingreso ilegal y reingreso ilegal han generado la implementación de atajos procesales, incluidos procesos grupales veloces llevados a cabo en el marco de “Operation Streamline”, que menoscaban los derechos al debido proceso de los inmigrantes.

El significativo costo financiero que implica juzgar penalmente a migrantes no autorizados también permite cuestionar la viabilidad del actual énfasis sobre el uso de procesos penales. Un informe publicado en septiembre de 2012 estimó que tan sólo los costos asociados con el encarcelamiento de quienes han sido condenados por ingresar o reingresar ilegalmente al país ascendieron a \$1.000 millones durante el ejercicio económico 2011. Quienes cumplen penas por ingreso y reingreso ilegal han engrosado considerablemente la población carcelaria a nivel federal, y debido a la sobrepoblación que existe en estas instituciones, muchos terminan en costosos establecimientos penitenciarios gestionados por empresas privadas. Hay además otros gastos vinculados con el proceso penal—como abogados defensores penalistas, fiscales y otros—que incrementan su costo. Por lo tanto, no resulta sorprendente que varios fiscales, funcionarios de aplicación de la ley y jueces federales hayan criticado la reasignación de enormes recursos para procesar penalmente a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública o nacional, especialmente cuando el sistema civil de inmigración establece sus propias sanciones para casos de ingreso y reingreso ilegal.

Human Rights Watch reconoce que todos los estados soberanos tienen un interés legítimo en regular el ingreso de personas a su territorio. Entendemos que los estados tienen un interés particular por disuadir el ingreso o el reingreso ilegal de personas que suponen una amenaza para la seguridad pública. El gobierno estadounidense ha decidido que la manera más efectiva de conseguir esta meta es a través de procesos penales en vez de la aplicación de las leyes sobre inmigración en el ámbito civil. Sin embargo, los procesos penales por delitos de ingreso ilegal que se impulsan actualmente son excesivamente amplios, y afectan a personas que no deberían estar en prisión. De este modo, desperdician recursos que podrían destinarse a iniciativas para incrementar la seguridad pública y generar un sistema de inmigración más seguro, eficiente y humano.

Mientras el gobierno de Obama y el Congreso debaten la posibilidad de reformar la legislación migratoria del país, existe el riesgo de que se incremente la rigurosidad de los procesos y las sanciones previstas en las leyes para estos delitos invocando la

necesidad de reforzar la “seguridad en la frontera”. Pero, permitir que esta situación continúe implica costos demasiado grandes que Estados Unidos no debería aceptar. La adopción de un sistema que permita regularizar la situación legal de los migrantes no autorizados sería un paso significativo para abordar la vulnerabilidad de numerosos inmigrantes expuestos a abusos y las desigualdades del actual sistema inmigratorio. No obstante, el derecho a la unidad familiar y a pedir asilo, además del debido proceso, no estarán garantizados a menos que quienes definen las políticas en Estados Unidos consideren también los costos que tiene actualmente el uso excesivo y errado de procesos penales en el control fronterizo.

Juzgar penalmente a quienes piden asilo antes de resolver su petición implica un incumplimiento de las obligaciones asumidas por Estados Unidos conforme al derecho internacional sobre refugiados, por lo que esta práctica no debe continuar. Asimismo, el fuerte impacto que estos procesos penales tienen para los migrantes no autorizados que intentan reunirse con sus hijos y otros familiares cercanos, especialmente cuando no haya evidencias de que estos migrantes sean personas peligrosas, justifica la aplicación de recursos y sanciones de naturaleza civil en vez de penales en los procesos inmigratorios. Como mínimo, el gobierno estadounidense debería aprovechar esta oportunidad para: evaluar si el uso tan extenso de los procesos penales contribuye a alcanzar los objetivos buscados; limitar la multiplicación de estos procesos (disponiendo incluso la suspensión de “Operation Streamline”); y asegurar que las prácticas de inmigración en Estados Unidos respeten los derechos humanos fundamentales en la mayor medida posible.

Recomendaciones

Al Congreso de Estados Unidos

- Reformar la legislación inmigratoria de Estados Unidos para proteger de manera más efectiva la unidad familiar:
 - Permitir que se tomen en consideración los vínculos familiares y otros factores positivos al adoptar decisiones sobre deportación, incluidos casos de personas que no sean ciudadanas y hayan recibido una condena penal anteriormente.
 - Permitir que personas que no sean ciudadanas, y cuya deportación conforme a la ley vigente les impida regresar a Estados Unidos, puedan solicitar ser excluidas de tal prohibición cuando las evidencias sugieran que mantienen fuertes lazos con ciudadanos estadounidenses o familiares con residencia permanente.
- Reformar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (*Immigration and Nationality Act*) para que se apliquen únicamente sanciones civiles, y no de tipo penal, en casos de ingreso y reingreso ilegal. Como mínimo, restablecer la versión anterior de la ley —que preveía una pena máxima de 2 años de prisión en el sistema penitenciario federal para el reingreso ilegal, en vez de 20— y prohibir la persecución penal de quienes pidan asilo.
- Derogar o reformar la habilitación de “Operation Streamline” y otros programas que permiten impulsar procesos penales masivos y cercenan los derechos de debido proceso de personas acusadas por ingreso ilegal.

Al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a los Fiscales Federales

- Interrumpir la iniciativa “Operation Streamline” y otros programas similares.
- Emitir directrices nacionales que se opongan a juzgar penalmente los casos de ingreso y reingreso ilegal cuando los migrantes tengan vínculos familiares estrechos en Estados Unidos o teman ser objeto de actos de violencia o persecución en el extranjero.
- Apoyar la reforma de las Pautas para la Determinación de Sentencias (*Sentencing Guidelines*), a fin de asegurar que las penas más severas se impongan a quienes han sido condenados por delitos graves y violentos.

Al Servicio de Control de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP)

- Asegurar que todas las personas que pidan asilo puedan iniciar este proceso apenas sean detenidas por personal del CBP.
- Remitir a quienes no sean ciudadanos a procesos penales únicamente cuando hayan sido condenados recientemente por delitos graves y violentos.
- Interrumpir la iniciativa Operation Streamline y otros programas similares.
- Formular una política que permita a agentes del CBP evaluar factores como los vínculos estrechos con familiares y circunstancias atenuantes al determinar si corresponde otorgar la libertad condicional.

Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos

- Remitir a quienes no sean ciudadanos a procesos penales únicamente cuando hayan sido condenados recientemente por delitos graves y violentos.
- Asegurar una aplicación coherente a nivel nacional de la política actual del ICE relativa a la discrecionalidad para iniciar procesos penales, a fin de limitar las deportaciones de personas que no sean ciudadanas estadounidenses y tengan vínculos con familias en Estados Unidos.

A la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos

- Efectuar un estudio para evaluar si el actual sistema sobre incremento de penas para casos de delitos de ingreso ilegal promueve objetivos de justicia penal adecuados y si tiene las características necesarias para cumplir eficazmente estos objetivos.
- Reformar las pautas para la determinación de sentencias en delitos de ingreso ilegal, a fin de asegurar que las penas más severas se apliquen a quienes hayan sido condenados recientemente por delitos graves violentos.
- Efectuar investigaciones para determinar qué proporción de personas condenadas por ingreso ilegal tienen vínculos con familias estadounidenses, y en qué medida esos vínculos inciden en los índices sobre reingreso ilegal.

“No se tomaron ni un minuto para evaluar su situación... [para preguntarse] por qué la estamos separando de su familia”



Rosa Emma Manríquez con su nieto, nacido en Estados Unidos. © Privado

En marzo de 2012, Rosa Emma Manríquez, una abuela de 62 años, fue condenada a cuatro meses de cárcel en una prisión federal por ingreso ilegal. Actualmente vive en Ciudad Juárez, México, a cientos de millas de sus seis hijos adultos y sus numerosos nietos, todos ellos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes de ese país.

Según señaló su hija, Norma Pulcher, a Manríquez le dijeron desde niña que había nacido en Texas y que era ciudadana estadounidense. Si bien no contaba con un certificado de nacimiento para probarlo, había vivido sin problemas en Estados

Unidos durante 40 años, donde tenía una vida tranquila y se dedicaba a limpiar casas, asistir a la iglesia y ocuparse de su familia. Contaba con un número de Seguro Social y una licencia de conducir válida emitida por Texas, que durante años había usado para trasladarse hasta Juárez de visita o para hacer compras.

En el otoño de 2011, Manríquez viajó hasta Juárez para asistir al dentista. Al regresar, fue interceptada en el cruce de El Paso, Texas. Según se indica en la denuncia, mostró su licencia de conducir y dijo que era ciudadana estadounidense, como lo hacía habitualmente. Fue acusada de ingreso ilegal por alegar de manera infundada que poseía la ciudadanía estadounidense. Pulcher y sus hermanos contrataron a un abogado de defensa criminal, pero dijo al respecto: “[N]o hizo nada por mi madre. Ella nos contó que el abogado ni siquiera le habló, salvo una única vez ante el tribunal, y le dijo que si quería quedar libre, solamente tenía que declararse culpable. Nunca le dijo que declararse culpable implicaría ser deportada a México”. Manríquez fue deportada inmediatamente después.

Al no tener familiares en Juárez, Manríquez intentó regresar dos meses más tarde con documentos falsos. Esta vez, tras declararse culpable de reingreso ilegal, fue condenada a cuatro meses de prisión y trasladada desde la cárcel de Pecos al Centro de Detención Federal en Houston. El proceso en su totalidad fue una experiencia horrenda para su familia. Pulcher contó que durante la audiencia en la

cual se dictó la condena, Christopher, su hijo de ocho años, lloró al ver a su abuela atada de pies y manos con cadenas.

Pulcher dijo a Human Rights Watch que para Manríquez la estancia en la cárcel de Pecos había sido difícil. En un momento sintió que le faltaba el aire y fue trasladada a la sala de emergencias, donde le indicaron que tenía presión arterial alta y sufría un trastorno de ansiedad. Sin embargo, las condiciones en el centro de detención federal en Houston fueron peores. “Contó que era un lugar muy hostil”, dijo Pulcher. “Nunca, jamás en su vida había estado en uno de estos lugares, una señora cristiana en la prisión federal... Cada vez que iba a visitarla, todos llorábamos. Ella lloraba tan desconsoladamente que comenzaba a temblar”.

Manríquez vive ahora sola en Juárez. Todos los abogados que han sido consultados por su familia les dijeron lo mismo: debido a que se declaró culpable la primera vez, se cerraron todas las puertas y nunca más podrá regresar a Estados Unidos.

Cuando su madre fue deportada, Pulcher sintió como si “se hubiese muerto” y tuvo que comenzar a recibir tratamiento por depresión. Actualmente le preocupa la seguridad de su madre en Juárez y ha evaluado la posibilidad de mudarse a México para estar con ella, pero no puede tomar esta decisión sin tener en cuenta a su esposo y su hijo.



Rosa Emma Manríquez en una cena familiar con su hija Norma Pulcher, que es ciudadana estadounidense. © Privado

El hijastro de Pulcher murió el año pasado mientras en el servicio del Ejército estadounidense en Afganistán. Antes de morir, intentó ayudar a la mujer que consideraba su “abuela” contactándose con su representante en el Congreso. Pulcher siente enojo de que el gobierno estadounidense ahora también le haya quitado a su madre: “No importa cuánto sufrimiento se esté causando a hijos y nietos, esto igualmente no los conmovió [a los funcionarios estadounidenses]. No se tomaron ni un minuto para evaluar su situación... [para preguntarse] por qué la estamos separando de su familia”³.

³ Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Norma Pulcher, 24 de octubre de 2012. Intentamos comunicarnos telefónicamente con el fiscal para que ofreciera un comentario sobre el caso, pero no tuvimos contestación.

“Más allá de si la deportan o la liberan... somos igualmente una familia”

Benny López es un ciudadano estadounidense de 38 años nacido en Kansas. Él y su esposa, Gabriela Cordova-Soto, tienen cuatro hijos que nacieron en Estados Unidos. Hasta la navidad de 2011, la familia vivía en una cómoda residencia en Wichita, Kansas, donde Benny era propietario de una próspera empresa dedicada a revestimientos y remodelaciones. En septiembre de 2012, cuando se reunió con Human Rights Watch, él y sus hijos compartían un departamento mínimo en una pequeña localidad en la frontera de Texas, a la espera de novedades acerca de si Gabriela podría alguna vez regresar a Estados Unidos.

Gabriela tenía nueve meses cuando fue llevada a Estados Unidos. Ahora tiene 35 años. Su crianza transcurrió en Texas y Kansas como residente legal, donde conoció a Benny. Benny dijo que cuando tenían aproximadamente 20 años, él y Gabriela se relacionaban con algunas personas indeseables y comenzaron a consumir drogas. En 2005, Gabriela fue condenada por posesión de metaanfetaminas. Benny era ciudadano estadounidense y comenzó a recibir tratamiento por drogas. Gabriela, en cambio, si bien no fue condenada a prisión, recibió una pena de libertad condicional y fue deportada. En noviembre de 2005, perdió su residencia legal y se le indicó que se le prohibía en forma permanente regresar a Estados Unidos debido a su condición de “infractor que cometió un delito agravado” (*aggravated felon*).

Al no tener familiares cercanos en México y sin ninguna experiencia de vida en ese país, Gabriela regresó poco tiempo después a Estados Unidos para estar con su familia⁴. Benny dijo al respecto: “Cambiamos completamente nuestro estilo de vida”. Benny emprendió un próspero negocio y comenzó a construir una nueva vivienda. Tienen dos hijas gemelas que habitualmente figuraban en la lista de alumnos destacados de su escuela, y su hijo mayor se convirtió en un jugador de ajedrez excepcional. Durante cinco años, contó Benny, “Asistíamos a la iglesia todos los domingos, y también los miércoles. Simplemente, estábamos viviendo la vida ”.

En 2010, las autoridades de inmigración se presentaron en la vivienda y detuvieron nuevamente a Gabriela. A pesar de que había cambiado su estilo de vida, esto no fue tenido en cuenta por las autoridades de inmigración, y fue deportada nuevamente, aun cuando en ese mismo período la

⁴ El modo en que Gabriela Cordova-Soto ingresó al país aún está siendo analizado en un proceso judicial en curso. Con la representación del National Immigrant Justice Center, Gabriela intenta actualmente que se vuelva a considerar su anterior deportación.

Suprema Corte había determinado que las condenas por posesión de drogas, como el caso de Gabriela, no constituían un “delito agravado” (*aggravated felony*). Benny intentó mantener dos hogares, pero la situación se fue tornando más difícil, y tuvo que renunciar a su empresa y a la vivienda que apenas había terminado de construir. Él y los niños se mudaron a Piedras Negras, México, a poca distancia de la frontera, para que la familia pudiera estar junta. Sin embargo, Benny y sus hijos no pudieron tener una vida productiva en México. No hablan español, y Benny no consiguió ganar suficiente dinero como para mantener a la familia. En un momento su camioneta fue robada, y Benny sospechó que los responsables eran traficantes de drogas, pero la policía no investigó lo sucedido.

Benny y sus hijos regresaron a Estados Unidos. Cuando Gabriela intentó reunirse con ellos, fue interceptada y juzgada por reingreso ilegal. Se encuentra detenida en una prisión federal desde septiembre de 2012. “Más allá de si la deportan o la liberan para que viva aquí en forma legal, somos igualmente una familia”, dijo Benny. “No puedo dejar a su madre. Sé que es difícil para los niños. ¿Qué se supone que debería hacer? Realmente no sé qué hacer”⁵.



Benny López (a la derecha) y sus cuatro hijos, todos nacidos en Estados Unidos, en su departamento en Texas, cerca de la frontera con México. La madre de los niños, que antes había tenido residencia permanente en Estados Unidos, fue deportada tras recibir una condena por tenencia de drogas. López tuvo que desplazar a su familia, oriunda de Kansas, para poder estar más cerca de su esposa. © 2012 Grace Meng/Human Rights Watch.

⁵ Entrevista de Human Rights Watch con Benny López, Eagle Pass, Texas, 19 de septiembre de 2012.

“Si bien aquí estoy en prisión, me siento más cerca de mis hijos que cuando estaba allá, libre”

Roberto López, a quien todos llaman Robert, llegó por primera vez a Estados Unidos cuando tenía tres años, y creció en Los Ángeles, California. Tiene cuatro hijos que nacieron en Estados Unidos, y su madre y sus hermanos también viven en ese país. Ahora tiene 28 años, y cuando lo entrevistamos en un centro de detención federal respondió a nuestras preguntas en inglés con total fluidez, y en un tono de voz bajo y sereno. Cumple actualmente una pena de cuatro años y medio de prisión por reingreso ilegal⁶.

A pesar de que Robert vive en Estados Unidos desde que era un niño, su situación legal es irregular. En 2006, luego de que se iniciara un procedimiento de deportación tras recibir una condena por agresión, se fue de Estados Unidos y se trasladó a México por medio de una orden de salida voluntaria. La vida en Tijuana le resultó difícil. Tenía dos empleos, pero no ganaba suficiente como para enviar dinero a su familia en Estados Unidos. Al igual que otros mexicanos que habían vivido en Estados Unidos durante muchos años, informó que era hostigado habitualmente por policías de México.



Tres de los hijos de Robert López, nacidos en Estados Unidos. © Privado



Robert López y su hija, nacida en Estados Unidos. © Privado

Robert permaneció igualmente en Tijuana durante varios años, ya que creía que aún estaba tramitando en Estados Unidos su solicitud de residencia permanente. (No sabía que al tener una condena penal le

⁶ Entrevista de Human Rights Watch con Robert López Francisco, Los Ángeles, California, 11 de octubre de 2012.

sería prácticamente imposible regresar). Pero luego su madre le contó que su esposa Amanda había comenzado a consumir drogas. Dijo a Human Rights Watch: “Escuchas todas estas malas noticias [en Tijuana], y sientes como si estuvieras en prisión porque no puedes hacer nada”. Robert temía que sus hijos pudieran ser apartados de su esposa y terminaban viviendo con una familia de acogida. Entonces, en 2010 decidió regresar. La primera vez fue detectado en la frontera y deportado, pero la segunda vez logró llegar a Los Ángeles.

Robert dijo que durante un año se dedicó a trabajar y visitar regularmente a Amanda en un centro de rehabilitación. Pero sospechaba que su esposa seguía consumiendo drogas. Robert presentó una acción de divorcio, pidió que le concedieran la custodia de sus hijos y las autoridades le otorgaron la custodia en forma transitoria. Dijo: “Fue entonces cuando mi esposa llamó a inmigración”.

Robert contó que, en 2003, se declaró culpable por consejo de su defensor de oficio, quien le indicó que recibiría una pena de solamente dos o tres semanas de prisión. Robert no pensó que esto podría resultar en su deportación. A pesar de lo que le habían dicho, recibió una condena de un año de prisión, y cumplió una pena efectiva de 11 meses. Robert no tiene otras condenas penales. Sin embargo, las Pautas Federales para la Determinación de Sentencias establecen que una sola condena anterior por un “delito con violencia”, ya sea que se trate de una riña o de un homicidio, puede causar la aplicación de rigurosas penas de prisión. La condena de cuatro años y medio de prisión por reingreso ilegal supera en más de cuatro veces al período que pasó en prisión cuando fue condenado por agresión 10 años antes.

Robert no se arrepiente de haber regresado a Estados Unidos. La custodia de sus hijos la tiene ahora la madre de Robert. Él quisiera que su madre, que a los 54 años trabaja 7 días a la semana como empleada domestica, pudiera descansar en vez de tener que criar a cuatro niños, y lamenta haberle “dejado una enorme responsabilidad”. Sin embargo, al mismo tiempo, dice al respecto: “Si bien aquí estoy en prisión, me siento más cerca de mis hijos que cuando estaba allá, libre”. Afirma que sus hijos son “felices, tienen buena salud”. Cuando les pregunta si quieren regresar con su madre, le dicen que preferirían quedarse con su abuela.

Lo que los hijos de Robert no terminan de comprender es por qué él está en prisión. “Mi hija mayor me pregunta ‘¿Has cometido un delito?’ Y yo le digo ‘Regresé por ti’”⁷.

⁷ Ibíd. El fiscal federal adjunto asignado a su caso se negó a efectuar comentarios debido a que la causa se encuentra en instancia de apelación.

“Una niña de 11 años necesita a su madre”

Tras vivir en Estados Unidos durante más de 20 años, Sonia H. (seudónimo) viajó a México, no con la intención de regresar definitivamente al país donde había nacido sino para enterrar a su hijo, un policía mexicano que murió durante un tiroteo en una carretera. Sonia, de 50 años, nos contó su historia desde una prisión en Marfa, Texas, mientras esperaba recibir una condena por reingreso ilegal.

Cuando su hijo fue asesinado en 2011, Sonia sintió la necesidad de viajar a México para acudir al entierro. Sin embargo, dijo Sonia, “Toda mi vida está en Estados Unidos”. Su otro hijo, que es ciudadano estadounidense, había solicitado a las autoridades que regularicen la situación legal de su madre, y ella ha ahorrado dinero para pagar la segunda parte del proceso de solicitud. Sonia y su pareja desde hace años, un residente permanente, tienen una hija de 11 años, también ciudadana estadounidense. Sonia tenía un buen empleo en una tintorería, cuyos dueños le tenían gran aprecio y se ocupaban de llevarla y traerla en automóvil de su casa al trabajo debido a que ella, por ser inmigrante no autorizada, no podía obtener una licencia de conducir.

En enero de 2012, Sonia intentó regresar a Estados Unidos ilegalmente utilizando documentos falsos, pero fue interceptada inmediatamente y condenada por ingreso ilegal. Según señaló el abogado que la representa actualmente en Texas, el juez federal a cargo de la primera causa recomendó que no fuera deportada, pero no tenía potestad para exigir que se cumpliera su recomendación. Por lo tanto, tras pasar 45 días en prisión por ingreso ilegal, fue deportada inmediatamente a través de un procedimiento acelerado. Según contó, un funcionario de la Patrulla Fronteriza le indicó que “firmara aquí”. Si hubiera sido asignada a un procedimiento de deportación normal podría haber solicitado que se cancelara la deportación, y en este tipo de procedimientos todos sus años de residencia en Estados Unidos y el impacto de la deportación para su familia estadounidense habrían sido tenidos en cuenta por un juez de inmigración. Sonia nunca antes había tenido problemas con la ley. “Ni siquiera me animaba a conducir sin licencia”, comentó.

Sonia mudó a su hija a México e intentaron vivir en Chihuahua, de donde era oriunda, pero este es uno de los estados de México más afectados por el crimen y la violencia

vinculados al narcotráfico. Sonia dijo que hubo tiroteos en frente del colegio al que asistía su hija, y se rumoreaba que secuestradores vigilaban a niños en edad escolar para elegir posibles víctimas. Contó que su hija le rogaba “Mami, vayámonos, vayámonos”. La hermana de Sonia la animó a intentar cruzar la frontera, y le decía “Tu hija está sufriendo”.

La hija de Sonia, que tiene ciudadanía estadounidense, fue enviada a California, pero cuando Sonia intentó reencontrarse con ella, fue descubierta nuevamente, y esta vez fue acusada por reingreso ilegal, y también por el delito de fraude. “Soy consciente de que cometí un delito al presentar papeles falsos”, dijo Sonia. “Pero lo hice solamente por el bien de mi hija”.

A Sonia le tranquilizaba que su hija viviera segura en California, pero se enteró de que tiene problemas para dormir y para concentrarse en la escuela. Desde hacía poco tenía también otro temor: que los servicios de protección infantil le quitaran su hija al padre debido a que este tenía problemas con la bebida. Su voz se quebró cuando dijo “imaginen qué podría sucederme si además de perder a mi hijo pierdo también a mi hija”.

Según Elizabeth Rogers, defensora federal adjunta en la oficina de Alpine, Texas, Sonia es un ejemplo de los cambios recientes en la aplicación de la ley penal federal a casos de inmigración: “Cuatro años atrás, [Sonia] no habría sido juzgada penalmente”⁸.

La hija de Sonia no sabía que su madre estaba en prisión, y pensaba que permanecía en México a la espera de que se le permitiera regresar. Sonia hablaba con ella una vez por semana, utilizando tarjetas telefónicas con las que puede hablar 15 minutos a un costo de \$20, y su hija continuaba preguntándole, “¿Vas a venir? ¿Cuándo vas a venir?”. Sonia contó que su hija había enviado al Presidente Obama una tarjeta que decía “Mi madre tuvo que regresar a México porque mataron a mi hermano. Si esto le sucediera a usted, ¿qué haría? Lo único que pido es que le permitan a mi madre estar conmigo. Una niña de 11 años necesita a su madre. Si se niega, le pediré a Dios que lo perdone”⁹.

⁸ Entrevista de Human Rights Watch con Elizabeth Rogers, defensora federal adjunta, Marfa, Texas, 21 de septiembre de 2012.

⁹ Entrevista de Human Rights Watch con Sonia H. (seudónimo), Marfa, Texas, 21 de septiembre de 2012.

“La ayuda de un abogado no te sirve de nada”

Brenda R. (seudónimo), una mujer de 45 años que durante años había residido en Dallas, Texas, ha intentado regresar a Estados Unidos tres veces porque tiene miedo de permanecer en México. Todas las veces, señala, fue juzgada penalmente y no tuvo oportunidad de pedir asilo.

En abril de 2012, los dos hijos adultos de Brenda, que no tenían ciudadanía estadounidense, fueron asesinados en México. Habían crecido en Estados Unidos, pero uno de ellos fue deportado a México y el otro regresó voluntariamente. Vivían juntos en un pueblo pequeño en el estado de Chihuahua, una región con altos índices de violencia vinculada al narcotráfico. Brenda dijo que sus hijos no estaban implicados en ningún tipo de actividad criminal, pero uno de ellos tenía lazos con una mujer que aparentemente era la pareja de un narcotraficante local. Luego de recibir amenazas, el hijo de Brenda y su hermano decidieron irse de esa localidad, según contó. Sin embargo, antes de que pudieran irse, fueron matados a tiros en el estacionamiento de un bar.

Brenda viajó a Chihuahua para asistir al entierro de sus hijos. Dijo al respecto: “También fui para investigar... Cuando llegué [al lugar de los hechos], aún había manchas de sangre y fragmentos de huesos de mis hijos”. Intentando contener las lágrimas, dijo “sentí la presencia [de uno de mis hijos] que me decía, ‘Por favor, mamá, llévame de aquí... llévame a casa’”. Comenzó a hacer preguntas sobre la investigación y presentó una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Esperaba que esto diera cierto impulso a la investigación del caso, aun cuando residentes y policías locales le advertían que dejara de hacer preguntas y que para ellos era muy riesgoso investigar lo sucedido.

Cuando Brenda intentó regresar en junio de 2012 para reunirse con su esposo y sus dos hijos estadounidenses en Dallas, Texas, fue detenida por la Patrulla Fronteriza y acusada de “ingreso ilegal”. Dijo que intentó explicar su temor de regresar a Chihuahua, pero que el agente simplemente le dijo “firme aquí”. Fue condenada, cumplió cinco días en prisión y luego (según los documentos del tribunal) volvió a México mediante un procedimiento de retorno voluntario. Un mes después, intentó nuevamente cruzar la frontera presentando en El Paso el permiso de cruce de un

amigo, pero fue descubierta y acusada de uso fraudulento de documentos. Brenda dijo: “Expliqué mi temor. Lloré ante los funcionarios de inmigración”. Su esposo intentó conseguirle un abogado, pero dijo que el agente de la Patrulla Fronteriza respondió “La ayuda de un abogado no te sirve de nada”. Según la documentación del tribunal, fue condenada por uso fraudulento de documentos, recibió una pena de nueve días de prisión y fue deportada mediante un procedimiento acelerado.

En septiembre de 2012, Brenda intentó una vez más cruzar la frontera y fue procesada penalmente y condenada por ingreso ilegal en el marco de la “Iniciativa de Justicia Retributiva”. Cuando la entrevistamos, cumplía una condena de 60 días de prisión, y aún intentaba lidiar con la situación traumática que había sufrido: “Cada vez que cierro mis ojos, lo único que veo son las imágenes de [mis hijos] baleados... en los ataúdes”¹⁰.

¹⁰ Entrevista de Human Rights Watch con Brenda R. (seudónimo), Pecos, Texas, 24 de septiembre de 2012; documentos del tribunal correspondientes a la causa *United States v. [nombre bajo reserva]*. El fiscal federal adjunto asignado a esta causa se negó a formular comentarios debido a que no recordaba el caso.

“¿Nos sirvió de algo haberle hecho esto?”

Carlos Santana creció en San Diego, California, desde los 4 años, y era residente legal permanente¹¹. Su madre y su hermana son ciudadanas estadounidenses naturalizadas. Carlos trabajaba como asistente de enfermería y le interesaban el arte y el diseño gráfico.

Hace nueve años, Carlos, de contextura delgada, mantuvo un altercado en un bar gay en Oregon que terminó en una riña. “Es la única pelea que he tenido en mi vida”, contó a Human Rights Watch en Tijuana, México. Carlos dijo que fue condenado por intento de agresión en segundo grado y que le indicaron que existía la posibilidad de revertir esta condena.

Carlos no fue deportado inmediatamente, pero dijo que en 2009, sin ningún otro antecedente, se acercó a la justicia para pagar una multa de tránsito y fue detenido y deportado en forma permanente a México por su anterior condena, que fue clasificada como “delito grave” (“aggravated felony”).

Carlos es VIH positivo, y contó que al llegar a México los funcionarios de salud le dijeron que demoraría un año conseguir los medicamentos que necesitaba. Sabía que no podría sobrevivir sin estas drogas, y regresó inmediatamente a Estados Unidos sin autorización. Poco después, conoció a Mark O’Brien, un ciudadano estadounidense, y si bien le resultó difícil volver a conseguir un empleo como el que tenía antes sin un documento de residencia permanente, Carlos y Mark comenzaron a planificar una vida juntos en San Diego. Luego, en abril de 2011, Carlos se trasladaba en bicicleta hasta su casa desde el departamento de Mark cuando fue interceptado por policías, posiblemente debido a que no circulaba por el carril correcto. La policía presentó a Carlos ante las autoridades de inmigración, y finalmente se le imputó el delito grave de reingreso ilegal.

Carlos recibió una pena de un año y medio de prisión, y su abogado le indicó que podría incluso haber recibido una condena de cinco años. Carlos y Mark habían decidido que si Carlos recibía una condena de más de un año, pondrían fin a la

¹¹ El nombre completo de Carlos Santana es Juan Carlos Salgado Santana, pero usa habitualmente el nombre Carlos Santana.

relación, pero Mark continuó visitándolo igualmente en la prisión. Carlos primero estuvo en un establecimiento de detención federal en el centro de San Diego y luego fue enviado a un establecimiento privado administrado por Corrections Corporation of America, en Otay Mesa. Mark se mostró indignado por el trato que Carlos recibía en el establecimiento de Otay Mesa: “¿Por qué lo alojan junto con narcotraficantes y pandilleros? La única arma de esta persona es un pedazo de papel, eso es todo, su documentación ilegal”. Mark contó que Carlos era golpeado por otros internos, obligado a dormir en el suelo porque no había suficiente espacio y que se le habían negado alimentos y otros privilegios en forma arbitraria. A Mark le angustiaba particularmente la posibilidad de que el encarcelamiento de Carlos fuera simplemente un preludio para su deportación: “Sería mejor que nos eviten a todos el gasto, lo deporten y nos permitan seguir adelante con nuestras vidas”.

No entendía por qué el gobierno estadounidense optaba por tratar a Carlos de este modo. “¿Por qué no podemos tener un proceso que examine la situación de las personas para permitir que él regrese? Ni siquiera puede obtener una visa... ¿Qué hizo de malo para que se le niegue en forma permanente la posibilidad de regresar a Estados Unidos, con su madre, su padre, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, y todas las personas que conoce acá?... ¿Nos sirvió de algo haberle hecho esto? Nunca antes me había sentido tan desilusionado con mi país”¹².

¹² Entrevistas de Human Rights Watch con Carlos Santana, Tijuana, México, 23 de octubre de 2012; y con Mark O'Brien, San Diego, California, 22 de octubre de 2012. Intentamos comunicarnos telefónicamente con el fiscal para que ofreciera un comentario sobre el caso, pero no tuvimos contestación.

CONVIRTIENDO A MIGRANTES EN DELINCUENTES

El impacto adverso de procesos penales en la frontera estadounidense

Causas por los delitos de ingreso y reingreso ilegal hoy constituyen la mayoría de los procesos penales que se impulsan en la justicia federal de Estados Unidos. La aplicación de las leyes inmigratorias habitualmente constituiría una cuestión de derecho civil—que implica multas y deportaciones—pero funcionarios estadounidenses afirman que es necesario intensificar las medidas de persecución penal para disuadir la inmigración ilegal y evitar que delincuentes peligrosos ingresen al país.

El informe *Convirtiendo a migrantes en delincuentes*, elaborado a partir del análisis de estadísticas y casi 200 entrevistas con migrantes, familiares, funcionarios gubernamentales y especialistas, examina el aumento reciente en la cantidad de procesos penales por delitos de naturaleza inmigratoria y los costos económicos y humanos cada vez mayores que estos conllevan.

Human Rights Watch comprobó que muchos de estos procesos afectan a personas para quienes estas medidas tendrán un menor efecto disuasivo, dado que intentan reencontrarse con hijos que son ciudadanos estadounidenses o con otros familiares cercanos en Estados Unidos; en algunos casos, escapan a contextos de violencia y persecución en el extranjero. Y los datos del propio gobierno estadounidense indican que una cantidad creciente de migrantes que no son peligrosos están siendo condenados indiscriminadamente a penas de prisión. En 2002, el 42 por ciento de las personas procesadas por estos delitos tenían condenas anteriores por delitos que la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos considera como los más graves, y solamente el 17 por ciento no tenía condenas previas por delitos graves. En 2011, estas cifras se estaban revirtiendo claramente: la proporción de quienes habían sido condenados por los delitos más graves descendió drásticamente al 27 por ciento, mientras que quienes no tenían condenas previas por delitos graves representaban ahora el 27 por ciento. A su vez, los procesos penales tienen importantes consecuencias económicas para Estados Unidos, como los gastos destinados a encarcelar a personas en prisiones federales sobrepobladas a un alto costo y contratar personal judicial adicional, defensores de oficio, fiscales y alguaciles federales.

Convirtiendo a migrantes en delincuentes señala en su conclusión que la actual estrategia, centrada en los procesos penales contra personas que violan las leyes sobre inmigración, constituye una decisión errada que afecta derechos humanos fundamentales. El documento insta a legisladores y funcionarios estadounidenses a adoptar medidas para impedir que se juzgue penalmente a las personas que pidan asilo o hayan cometido delitos no violentos e intentan reencontrarse con sus seres queridos. A su vez, también los invita a reconsiderar el actual enfoque que prioriza la persecución penal y a asegurar que los recursos gubernamentales se utilicen de manera efectiva para proteger la seguridad pública y dar impulso a los objetivos de Estados Unidos en materia de inmigración.



Hombres deportados recientemente de Estados Unidos forman fila para ser registrados por las autoridades mexicanas en la frontera en Nogales, México.

© 2010 Associated Press